El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

**TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN / PAGO HONORARIOS JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN / ES CARGA DEL FONDO DE PENSIONES / NO ES OBLIGACIÓN DEL AFILIADO FORMULAR REQUERIMIENTO ALGUNO.**

… la queja constitucional se plantea contra las demandadas por la demora presentada en el trámite de la apelación formulada contra el dictamen médico laboral proferido en primera sede…

Respecto a la subsidiariedad se observa que esta Colegiatura en anteriores pronunciamientos ha dejado sentado que, si bien un conflicto frente a la determinación de pérdida de capacidad laboral es un asunto que corresponde conocer a la jurisdicción ordinaria laboral, lo cierto es que ese mecanismo de defensa no se torna idóneo ni eficaz para resolver la problemática concreta que se plantea en estos eventos, que no es otra que controvertir una omisión o demora en el procedimiento administrativo de calificación de invalidez…

La anterior tardanza, ha sostenido la Sala, cuando menos afecta los derechos fundamentales al debido proceso administrativo sin dilaciones injustificadas y la seguridad social…

Así mismo se ha dicho que no es posible someter al trámite de un proceso ordinario laboral, que en términos generales implica la inversión de suficiente tiempo, a una persona que tiene la potencialidad de ser considerada inválida…

Se recuerda que en esa providencia el juzgado de conocimiento negó la protección invocada con fundamento en que la demandante ha debido acudir a Colpensiones en procura de que esa entidad sufragara los honorarios del órgano técnico…

La Sala… no está de acuerdo con esa posición toda vez que por las condiciones particulares del caso, tal como lo aduce la demandante, no le era posible atribuirle dicha carga…

Al haberse demostrado la mora de Colpensiones en la ejecución de sus funciones dentro de los términos legales aplicables al caso concreto, que afectó los derechos fundamentales del accionante, así como la inexistencia de acción u omisión atribuible a las vinculadas Juntas de Invalidez, pues en Colpensiones y no en ellas, radica la competencia para impulsar aquel trámite, no queda opción diferente que conceder el amparo frente a ese fondo de pensiones…

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA**

**SALA CIVIL – FAMILIA**

Magistrado Ponente: Carlos Mauricio García Barajas

Pereira, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Acta N° 412 de 26-08-2022

Sentencia: ST2-0291-2022

**ASUNTO**

Procede la Sala a resolver sobre la impugnación formulada por la parte actora frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 08 de julio pasado, dentro de la acción de tutela que promovió la señora Blanca Nidia Henao Marín contra Colpensiones y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, trámite al que fueron vinculados la Directora de Medicina Laboral de la primera de esas entidades, así como la Junta Regional de Invalidez de Risaralda.

**ANTECEDENTES**

**1.** Del escrito de tutela se advierte que el 12 de enero de 2022, la demandante formuló apelación contra el dictamen médico laboral emitido por la Junta Regional de Invalidez de Risaralda, sin embargo, a la fecha y luego de vencido el término legal correspondiente, no se ha desatado ese recurso. Para obtener la protección de sus derechos al debido proceso y la seguridad social solicita se ordene a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez resolver la apelación propuesta, con la emisión del dictamen de pérdida de la capacidad laboral de segunda instancia[[1]](#footnote-2).

**2. Trámite:** Por auto del 23 de junio pasado, el juzgado de primera instancia admitió la acción constitucional.

La Junta Regional de Invalidez de Risaralda refirió que hasta que Colpensiones no asuma su obligación sobre el pago de honorarios de la Junta Nacional de Calificación, no es posible la remisión del expediente ante esa última entidad, por expresa prohibición legal del artículo 43 del Decreto 1352 de 2013[[2]](#footnote-3).

La Junta Nacional de Calificación de la Invalidez informó que de la revisión de su base de datos no encontró radicado el expediente de la demandante, requisito sin el cual esa entidad no puede desatar la apelación formulada. Explicó que el envió del caso a esa segunda instancia, lo hacen las Juntas Regionales, siempre y cuando se allegue la constancia de pago de honorarios, emitida por la autoridad competente[[3]](#footnote-4).

**3. Sentencia impugnada:** En providencia del 08 de julio último, el juzgado de primer nivel negó el amparo invocado tras considerar "el Juez Constitucional no puede obligar a una entidad del orden regional y mucho menos nacional, abordar el conocimiento de un recurso ante un dictamen, sin que el fondo de pensiones hubiese cancelado los honorarios que la Ley determina para tal fin. Dentro del plenario no obra alguna actuación que hubiese adelantado la parte actora con el fin de que el fondo de pensiones cancelará dichos honorarios... Ahora bien, de lo que si (sic) existe prueba es que la Junta Regional de Calificación de Invalidez remitió las comunicaciones informando sobre dicha obligación, por lo que los trámites internos administrativos al parecer ya se han iniciado para que se surta la azada ante la Junta Nacional. A lo anterior se suma, el hecho de que el fondo público de pensiones debe de guardar especial cuidado con los recursos públicos que maneja... Por lo antes expuesto considera este despacho, salvo mejor criterio que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para pretender que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, conozca de una alzada sin haberse cancelado los honorarios por parte de la entidad que le corresponde asumirlos”[[4]](#footnote-5).

**4. Impugnación:** Argumenta la demandante que no se le puede transferir la carga de solicitar a Colpensiones pagar los honorarios, como requisito para tramitar la apelación formulada contra el dictamen médico laboral, toda vez que los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, son claros en establecer que el fondo de pensiones debe asumir esa obligación sin requisitos ni trabas adicionales. Así mismo, el juzgado de primer nivel admite que la Junta Regional cumplió su deber de informarle a Colpensiones “las irregularidades dentro de mi proceso”[[5]](#footnote-6).

**CONSIDERACIONES**

**1.** El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable (art. 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991).

**2.** En el caso concreto la queja constitucional se plantea contra las demandadas por la demora presentada en el trámite de la apelación formulada contra el dictamen médico laboral proferido en primera sede. El juzgado de conocimiento negó la protección invocada al encontrar que la demandante no acudió a Colpensiones para solicitar el pago de honorarios, como presupuesto para dar trámite al citado recurso. La impugnante, adujo, en contraposición, que a ella no se le puede imponer la carga de requerir al fondo de pensiones para que asuma su obligación legal, más aún si se tiene en cuenta que la Junta Regional de Invalidez de Risaralda puso al tanto a esa administradora de pensiones, sobre el estado de procedimiento médico legal.

De conformidad con lo anterior, el problema jurídico consiste en determinar si el amparo resulta procedente y, de serlo, si las entidades accionadas lesionaron los derechos del demandante.

**3.** La señora Blanca Nidia Henao Marín está legitimada en la causa por activa, al ser la persona que promovió el citado procedimiento de calificación de invalidez. También está legitimada por pasiva Colpensiones, por intermedio de su Directora de Medicina Laboral, como autoridad encargada de atender el caso (Artículos 4.3.2.3 y 4.3.2.4 del Acuerdo 131 de 2018 de la Junta Directiva de Colpensiones); tomando en cuenta que esa autoridad no fue llamada a integrar el contradictorio, a pesar de que en su contra también se dirige la demanda y que de conformidad con lo indicado por las partes, es su competencia intervenir en el trámite médico legal, para acreditar el pago de los honorarios a favor de la Junta Nacional de Invalidez, en esta sede se ordenó ponerla en conocimiento de esa situación, empero por el hecho de no haber alegado la nulidad, esta se considera saneada.

**4.** En punto de la inmediatez, es evidente la actualidad de la afectación de derechos fundamentales. En efecto, el citado recurso de apelación fue concedido por la Junta Regional de Invalidez el 22 de abril de este año[[6]](#footnote-7) y la tutela fue interpuesta el 22 de junio último[[7]](#footnote-8), quiere decir ello que dentro de cada extremo temporal, transcurrieron apenas dos meses y por tanto el amparo fue promovido en tiempo razonable.

**5.** Respecto a la subsidiariedad se observa que esta Colegiatura en anteriores pronunciamientos ha dejado sentado que, si bien un conflicto frente a la determinación de pérdida de capacidad laboral es un asunto que corresponde conocer a la jurisdicción ordinaria laboral[[8]](#footnote-9), lo cierto es que ese mecanismo de defensa no se torna idóneo ni eficaz para resolver la problemática concreta que se plantea en estos eventos, que no es otra que controvertir una omisión o demora en el procedimiento administrativo de calificación de invalidez, concretamente en lo regulado por el artículo 17 de la Ley 1562 de 2012, que establece que Junta Regional de Invalidez procederá a remitir el expediente a su superior una vez se allegue la consignación de los honorarios (Art. 43 Decreto 1352 de 2013, compilado en el artículo 2.2.5.1.41. del Decreto 1072 de 2015).

La anterior tardanza, ha sostenido la Sala, cuando menos afecta los derechos fundamentales al debido proceso administrativo sin dilaciones injustificadas y la seguridad social[[9]](#footnote-10), lo primero porque el término legal de dos días para acreditar el pago de los honorarios por parte del fondo de pensiones, mismo con el que se cuenta para remitir el expediente al superior (Art. 43 Decreto 1352 de 2013), se ve ampliamente superado en este caso; y lo segundo, ante la importancia del trámite de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, aspecto indispensable para garantizar el acceso a algunas prestaciones económicas reguladas en el sistema general de seguridad social en pensiones, de las cuales depende en muchos casos la existencia digna de personas en situación de debilidad manifiesta, como es el caso de aquellas personas en condición de discapacidad.

Así mismo se ha dicho que no es posible someter al trámite de un proceso ordinario laboral, que en términos generales implica la inversión de suficiente tiempo, a una persona que tiene la potencialidad de ser considerada inválida, simplemente para que se defina lo relativo al trámite de la remisión del procedimiento a la Junta Nacional de Invalidez.

Como en el presente caso los contornos fácticos relevantes son similares a los juzgados con anterioridad, y no se observan razones que motiven modificar el precedente horizontal, en respeto del mismo la Sala procede a reiterar la anteriores reglas, que llevan a concluir la procedencia de la acción de tutela para el reclamo puntual de la accionante, consistente en que las demandadas agoten los procedimientos administrativos necesarios para que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez pueda desatar la apelación planteada.

**6.** Dilucidado lo anterior se procede a analizar los argumentos que plantea la impugnante frente al fallo de primer nivel. Se recuerda que en esa providencia el juzgado de conocimiento negó la protección invocada con fundamento en que la demandante ha debido acudir a Colpensiones en procura de que esa entidad sufragara los honorarios del órgano técnico que deberá desatar la apelación contra el dictamen de calificación de invalidez.

La Sala, para decirlo de una vez, no está de acuerdo con esa posición toda vez que por las condiciones particulares del caso, tal como lo aduce la demandante, no le era posible atribuirle dicha carga, cuando existe constancia de que mediante correo electrónico del 26 de abril de 2022[[10]](#footnote-11) la Junta Regional de Invalidez de Risaralda puso en conocimiento de Colpensiones que para poder trámite el recurso de apelación formulado contra el dictamen de primer nivel en el caso de la actora, se debían sufragar los honorarios de la Junta Nacional de Invalidez, en los términos del artículo 43 del Decreto 1352 de 2013[[11]](#footnote-12).

En este punto valga la pena aclarar que el medio utilizado para remitir esa comunicación a Colpensiones fue la dirección electrónica de Gestar Innovación, entidad a la que, como lo ha sostenido esta Sala, se concedió la facultad por parte de Colpensiones para “notificarse de cualquier dictamen emanado en primera y segunda instancia y demás solicitudes emitidas por las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez” y “Proyecte y radique dentro de los términos legales las apelaciones directas presentadas contra los dictámenes proferidos en primera instancia por las Juntas Regionales de Calificación de invalidez, y efectué su respectivo seguimiento”, de conformidad con el poder general suscrito por el Presidente de esa administradora de pensiones. (Sentencia: ST2-0255-2022 del 28 de julio de 2022)

Significa lo anterior que de antemano Colpensiones fue informado sobre la carga que por mandato legal le correspondía asumir y por lo mismo no resultaba acertado imponer como presupuesto para continuar la actuación médico laboral, la existencia de un nuevo requerimiento en ese sentido por parte de la actora, lo cual refulge a todas luces redundante y no puede admitirse como argumento válido para soportar la improcedencia de la acción de tutela. Lo que se presenta es, sin más, una dilación injustificada dentro de un procedimiento administrativo que, ante la afrenta que genera a derecho fundamentales, obliga la intervención del juez constitucional.

**7.** Aclarado todo ello, observa esta Colegiatura que si a la fecha no existe constancia de que por parte de Colpensiones se hayan sufragado los honorarios de la Junta Nacional a pesar de que el dictamen realizado por la Junta Regional de Invalidez a la actora tuvo lugar el 30 de diciembre de 2021 y que la apelación que en su contra formuló la demandante, fue concedida el 22 de abril de este año, tal como se ha venido reiterando en esta providencia, lo que se hace patente que se superó con holgura el término de dos días que el reglamento señala para la remisión del expediente al superior, mismo dentro del cual tendría que acreditarse el pago de los honorarios por la entidad obligada a ello (Art. 43 Decreto 1352 de 2013 ya citado).

Se tiene entonces que de conformidad con lo hechos probados, en forma objetiva transcurrió vasto tiempo desde que se dio trámite a la apelación, sin que Colpensiones hubiese adelantado los trámites pertinentes para garantizar el pago oportuno de los honorarios de la Junta Nacional, lo que hacía procedente el amparo. En aquellas particulares circunstancias, no resultaba plausible someter a la accionante a los trámites propios de un proceso ordinario ante el juez natural, únicamente para que se ordene a la administradora de pensiones pagar los honorarios a su cargo.

Al haberse demostrado la mora de Colpensiones en la ejecución de sus funciones dentro de los términos legales aplicables al caso concreto, que afectó los derechos fundamentales del accionante, así como la inexistencia de acción u omisión atribuible a las vinculadas Juntas de Invalidez, pues en Colpensiones y no en ellas, radica la competencia para impulsar aquel trámite, no queda opción diferente que conceder el amparo frente a ese fondo de pensiones para restablecer los derechos al debido proceso y a la seguridad social que por cuenta de aquella omisión fueron lesionados.

**8.** Por tanto, se revocará la decisión impugnada y como medida de protección se ordenará a la Directora de Medicina Laboral de Colpensiones que proceda a surtir las gestiones administrativas del caso a efecto de sufragar los honorarios de la Junta Nacional de Invalidez, como requisito para dar trámite a la apelación formulada por la actora. Frente a la Junta Regional de Invalidez de Risaralda y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el amparo se declarará improcedente, por lo dicho en antelación.

**9.** Para finalizar, y con fundamento en el inciso final del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se prevendrá a Colpensiones para que evite la repetición de la misma omisión que motivó, no solo esta acción de tutela, sino las múltiples que de forma reiterada y por similares hechos (demora en el pago anticipado de honorarios de la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez), ocupan la atención de las autoridades judiciales de este Distrito.

Con ese fin, se exhortará a la Directora de Medicina Laboral de Colpensiones para que continúe adoptando mejores prácticas administrativas que le permitan dar cumplimiento oportuno al artículo 17 de la Ley 1562 de 2012, en cuanto corresponde con el pago anticipado de los honorarios de la Junta Regional, y al artículo 41 de la Ley 100 de 1993, en el punto relacionado con la remisión del expediente respectivo en el término allí previsto. Para la vigilancia de este específico propósito, y no para verificar el cumplimiento de esta precisa sentencia de tutela, remítase copia de esta providencia a la Superintendencia Financiera de Colombia, como ente encargado de la supervisión y vigilancia de Colpensiones. Se le exhorta de manera respetuosa para que, dentro del marco de sus competencias y en forma coordinada con las demás entidades involucradas, continúe adelantando las gestiones que sean necesarias para lograr el cumplimiento de los términos administrativos por cuenta de la entidad accionada, y evitar así la constante vulneración de derechos fundamentales de personas que generalmente por su condición de salud, son sujetos de especial protección y acuden al trámite de la determinación de la pérdida de su capacidad laboral.

En similares términos se oficiará al Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones y la Dirección de Riesgos Laborales.

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Se revoca la sentencia impugnada, de fecha y procedencia ya indicadas, para en su lugar conceder la tutela a los derechos al debido proceso y seguridad social de que es titular la actora y en consecuencia se ordena a la Directora de Medicina Laboral de Colpensiones que, en el término de 48 horas contado desde el momento en que sea notificada de esta providencia, acredite el pago de los honorarios ante la Junta Regional de Invalidez de Risaralda, a efecto de que se pueda remitir el expediente a la Junta Nacional de Invalidez, donde se resolverá la apelación formulada por la demandante contra el dictamen emitido en su caso.

Se declara improcedente el amparo respecto de la Junta Regional de Invalidez de Risaralda y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

**SEGUNDO:** Notificar a las partes lo aquí resuelto en la forma más expedita y eficaz posible. Comuníquese de igual forma al Juzgado de primera instancia.

**TERCERO:** Se PREVIENE nuevamente a Colpensiones para que evite la repetición de la misma omisión que motivó, no solo esta acción de tutela, sino las múltiples que de forma reiterada y por similares hechos, ocupan la atención de las autoridades judiciales de este Distrito.

Con ese fin, se EXHORTA a la Directora de Medicina Laboral de Colpensiones para que continúe adoptando las mejores prácticas administrativas necesarias, que le permitan dar cumplimiento oportuno al artículo 17 de la Ley 1562 de 2012, en cuanto corresponde con el pago anticipado de los honorarios de la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, a fin de no dilatar el procedimiento administrativo en desmedro de los derechos fundamentales de los interesados.

Para la vigilancia de este específico propósito, y en los términos expuestos en la motiva, remítase oficio con copia de esta providencia a la Superintendencia Financiera de Colombia, como ente encargado de la supervisión y vigilancia de Colpensiones, y al Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones y la Dirección de Riesgos Laborales.

**CUARTO:** Enviar oportunamente, el presente expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los Magistrados,

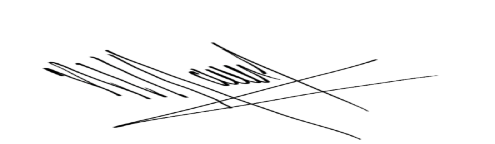
Firma electrónica

**CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS**



**ANDRÉS FERNANDO MEJÍA RESTREPO**

Conjuez



**HELMER OCAMPO LOZANO**

Conjuez

1. Documento 02 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-2)
2. Documento 06 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-3)
3. Documento 07 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-4)
4. Documento 08 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-5)
5. Documento 10 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-6)
6. Folios 27 y 28 del archivo 06 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-7)
7. Archivo 03 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-8)
8. Artículo 2o. del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2º de la Ley 712 de 2001. [↑](#footnote-ref-9)
9. Frente a la demora en el pago de los honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, para tramitar la inconformidad del afiliado respecto al dictamen de primera oportunidad: Cfr: Sentencia: TSP. ST2-0147-2021 de 13 de mayo de 2021, radicado 66001310300220210005801. Sentencia: TSP. ST2-0148-2021 de la misma fecha, radicado 66001310300220210005001; Sentencia TSP. ST2-0148-2021 de 24 de mayo de 2021, radicado 66001310300220210005001; Sentencia TSP. ST2-0166-2021 de 10 de junio de 2021, radicado 66001312100120211002701; Sentencia: TSP. ST2-0173-2021 de 16 de junio de 2021, radicado 66001311000320210013801; Sentencia: TSP. ST2-0186-2021 de 18 de junio de 2021, radicado 66001312100120211003301; Sentencia: TSP. ST2-0187-2021 de 18 de junio de 2021, radicado 66001312100120211003401. Sentencia: TSP. ST2-0258-2021 de 18 de agosto de 2021, radicado 66001311000120210018501. Sentencia TSP. ST2-0291-2021 de 6 de septiembre de 2021, radicado 66170310300120210011201. Sentencia TSP. ST2-0305-2021 del 10 de septiembre de 2021, radicado 20210033301. Sentencia TSP. ST2-0337-2021 de 13 de octubre de 2021, radicado 66001310300520200012601. Sentencia TSP. ST20358-2021 del 25 de octubre de 2021, radicado: 66001310300320210017401. Sentencia: TSP. ST2-0404-2021 del 17 de noviembre de 2021 radicado: 66001310300320210019901. Sentencia: TSP. ST2-0409-2021 del 22 de noviembre de 2021 radicado: 66001310300520210009101. Sentencia: TSP. ST2-0446-2021 del 15 de diciembre de 2021, radicado: 66001311000120210042301. Frente al caso concreto de la temporalidad de los recursos planteados contra dictámenes médico laborales se puede leer la Sentencia: ST2-0043-2022 del 09 de febrero de 2022, radicado: 66001310300320210027301. Sentencia: ST2-0073-2022 del 22 de marzo de 2022, radicado: 66001312100120221000601.Sentencia: ST2-0089-2022 del 07 de abril de 2022 radicado: 66001312100120221000401. Sentencia: ST2-0118-2022 del 06 de mayo de 2022, radicado: 66001311000320220007401. Sentencia: ST2-0148-2022 del 24 de mayo de 2022, radicado: 66001311000220220011401 y Sentencia: ST2-0209-2022 del 05 de julio de 2022

   En casos de demora en el pago de los honorarios a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para tramitar el recurso de apelación frente al dictamen de primera instancia: Cfr: Sentencia: TSP. ST2-0185-2021 de 18 de junio de 2021, radicado 66001310300120210007001; Sentencia: TSP. ST2-0213-2021 de 1 de julio de 2021, radicado 66001311000220210013401. Sentencia: TSP. ST2-0409-2021 del 22 de noviembre de 2021, radicado: 66001310300520210009101. Sentencia: ST2-0028-2022 del 02 de febrero de 2022, radicado: 66001311000420210047801. Sentencia: ST2-0039-2022 del 07 de febrero de 2022, radicado: 66001310300420210029701. Sentencia: ST2-0073-2022 del 22 de marzo de 2022, radicado: 66001312100120221000601. Sentencia: ST2-0090-2022 del 07 de abril de 2022, radicado: 66001310300320220011501.Sentencia: ST2-0135-2022 del 17 de mayo de 2022 y Sentencia: ST2-0175-2022 del 07 de junio de 2022. Sentencia: ST2-0255-2022 del 28 de julio de 2022. [↑](#footnote-ref-10)
10. Folio 37 del archivo 06 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-11)
11. Folio 04 del archivo 06 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-12)